

El PP consume el 'tarifazo' que puede clausurar Garoña

SORIA ASEGURA QUE EL GOBIERNO INVESTIGARÁ EL CIERRE PREMATURO DE LA CENTRAL BURGALESA

Nuclenor sostiene que si sigue la actividad tras la aplicación de la Ley aprobada ayer en el Congreso perderá 96 millones

VITORIA. Aunque Nuclenor lanzó una órdago de última hora, -un "chantaje" según el ministro de Industria José Manuel Soria- el PP está decidido a recaudar en el sector eléctrico y ayer aprobó definitivamente la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética que ha dado la puntilla a la central nuclear de Garoña, al menos en teoría. Nuclenor había pedido, in extremis, que se revisaran ciertas condiciones de los nuevos impuestos a los residuos nucleares, tras ordenar el vaciado del reactor antes del 31 de diciembre y evitarse así el pago de 150 millones de euros que de esta manera deja de recaudar el Gobierno de Rajoy.

Sin embargo, ayer en el Congreso de los Diputados el PP hizo uso de su mayoría absoluta y votó el proyecto de Ley después de que éste se completara en el Senado, lo que puede significar, o eso al menos afirma Nuclenor, el cierre definitivo de Garoña, que en todo caso ya iba a echar la persiana en julio. La firma que lideran Endesa e Iberdrola renunció a pedir la prórroga hasta 2019 que le había puesto en bandeja el Gobierno tras enterarse de que a cambio iban a contribuir a reducir el desbocado déficit español con una importante subida de impuestos. La entrada en vigor, en apenas una semana, de la nueva Ley, no ha hecho sino adelantar el cierre en seis meses.

Un movimiento que se interpretó como un órdago y al que el ministro ha respondido con otro. Según se anunció ayer, Industria investigará las circunstancias de la retirada del combustible nuclear: "No estoy hablando de una sanción, pero si la fecha de cierre para un reactor está establecida en una fecha no se puede, gratuitamente, decir seis meses antes que esto se ha terminado", advirtió Soria. En ese sentido, el Consejo de Seguridad Nuclear, dependiente del Gobierno central, ha solicitado a Nuclenor información adicional

sobre la parada de la planta ante "las diferencias existentes entre la notificación enviada al CSN y el comunicado de prensa emitido por la central al día siguiente".

Por otro lado, Soria rechazó que las nuevas tasas hagan inviable económicamente la instalación burgalesa. "Lo que le correspondería a Garoña serían 155 millones de euros y la inversión que debía hacer después de Fukushima está valorada en 120 millones, así que todavía tenía un margen de lucro de 125 millones", aseguró. Nuclenor había afirmado que con los nuevos impuestos debería abonar 1,5 veces sus ingresos previstos, lo que se traduciría en pérdidas de 96 millones de euros.

Tras su paso por el Senado, el PP ha introducido varios cambios en la norma, entre los que destacan un incremento del 6% al 7% en el nuevo impuesto a la producción de electricidad, una exención para el gas natural de uso "profesional", mayores cargas sobre el carbón y precisiones en el mecanismo para que la recaudación y los ingresos obtenidos con las subastas de CO2 puedan pasar a la tarifa eléctrica.

Al margen de la bronca mediática que mantienen Nuclenor y el ministro Soria están los trabajadores de la central, que ya con casi total seguridad van a perder sus empleos. Ayer el comité de empresa dijo que la plantilla se siente "defraudada" con Endesa e Iberdrola. "Trabajadores y comité de empresa creemos que sería una injusticia grande que una empresa como ésta, que podría estar funcionando hasta el 2019, que ha dado energía y riqueza a la zona, tenga que cerrar no sabemos por qué", afirmó el presidente del comité, Alberto César González. Los sindicatos trabajarán ahora para que "ninguno de los empleados quede desprotegido si el cierre se materializa y es definitivo". Actualmente, la central emplea a cerca de 800 personas. >T.D./E.P./EFE



Manifestación contra la central de Garoña. FOTO: ALEX LARRETXI

Cáritas pinta un panorama negro para el próximo año en Álava

La organización espera atender este año a 16.000 familias en el territorio

VITORIA. El 11,6% de los hogares vascos se sitúa en la actualidad por debajo del umbral de la pobreza en Euskadi a consecuencia de la crisis económica, que está deteriorando la situación de la clase media vasca, según ha constatado Cáritas. Los responsables de Vitoria comparecieron ayer para presentar una nueva campaña con motivo de la Navidad, bajo el título *Vive sencillamente y trabaja por un mundo más justo*, en la que hicieron una radiografía de la situación de la pobreza en el territorio.

Ramón Ibeas, secretario general de Cáritas Vitoria, explicó que lo "habitual" antes de la crisis económica era que en Euskadi la población inmigrante representara el 70% de los que acudían a solicitar la ayuda de esta organización y que el 30% fuera población autóctona. Sin embargo, la crisis económica ha provocado que este porcentaje se esté "equilibrando" y se sitúe ahora en un 60-40%. En este cambio ha influido el hecho de que hay inmigrantes que están volviendo a sus países de origen, mientras que la clase media autóctona está sufriendo el impacto de la crisis económica. Aunque todavía Euskadi está por encima de la media, ya que en España asciende a un 21,8 el porcentaje de hogares que vive por debajo del umbral de la pobreza, la previsión para el próximo año en Euskadi y Álava, en particular, "es bastante negra" ante la perspectiva de que siga creciendo el paro, según reconoció Santos Gil, director de Cáritas Vitoria.

Según los datos facilitados, esta asociación ha atendido hasta noviembre de este año a un total de 13.400 familias en Álava, y esperan estar entre las 15.000 y 16.000 al finalizar el año. El año pasado se situaron entorno a las 18.000 familias. De las 13.400 familias atendidas por la organización en sus despachos parroquiales del territorio hasta noviembre, los apoyos económicos superaron los 1.500 (2.500 el pasado año) y fueron más de 7.200 las respuestas no económicas ofrecidas. El descenso en los apoyos económicos se debe a que la organización se ha vuelto más exigente. >EFE

Los trabajadores de Foronda abandonan el encierro y citan a Aena en los tribunales

UN TOTAL DE 55 EMPLEADOS MAYORES DE 50 AÑOS ACEPTA LA DESVINCULACIÓN VOLUNTARIA DE LA EMPRESA

advertieron de que "el siguiente paso es ir a los tribunales", ya que no se ha llegado a ningún acuerdo con la dirección para ampliar el horario del aeropuerto.

Según puntualizó el delegado de UGT en Foronda, Celedonio Gómez, cinco de los trabajadores han decidido seguir con el encierro pese a que en la asamblea celebrada ayer en la terminal se optó por regresar a casa.

Por otro lado, Gómez informó de que 55 empleados del aeropuerto alavés han solicitado la "desvinculación voluntaria, que no prejubilación", según precisó. Esta fórmula se contempla para trabajadores de más de 50 años y supone una indemnización de 20 días por año trabajado en doce mensualidades, que se pueden ampliar a 31 días si no encuentran otro empleo en seis meses. >E.P.

VITORIA. Los trabajadores del aeropuerto de Foronda decidieron ayer levantar "de manera provisional" el encierro que iniciaron la semana pasada en la terminal y

LA DUNA

Portal de Bergara, 3
945 281 295

LA ZUYANA

Ctra. de Betoño, 48
945 282 571

¡¡ Disfruta de tus cenas con nuestra pantalla gigante !!

ARKATZA

ABIERTO hasta las 24h.

Arkatza, 1
945 139 598